201-M-2001

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las doce horas y cincuenta minutos del día trece de enero del año dos mil tres.

A sus antecedentes el escrito de fecha ocho de octubre del año dos mil dos presentado por el señor Francisco Alexander Martínez Acosta.

Tómase nota del nuevo lugar señalado para oír notificaciones.

Por cumplido el traslado conferido al señor Fiscal General de la República.

A sus antecedentes el escrito presentado el tres de diciembre del año dos mil dos por la licenciada Tatiana Margarita Uceda López. Tiénese por agregada la credencial con que legitima su personería y désele intervención en el presente juicio, en carácter de delegada del señor Fiscal General de la República, en sustitución de la licenciada Ana Ruth Martínez de Pineda.

Tómase nota del lugar para oír notificaciones.

Conforme al artículo 15 inciso final de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal tiene la facultad de declarar la inadmisibilidad de una demanda en cualquier estado del proceso, siempre que se advirtiere que ha existido un vicio en la admisibilidad de ésta.

Respecto a la admisibilidad de la demanda incoada ante este Tribunal por el señor Francisco Alexander Martínez Acosta es necesario hacer las siguientes consideraciones.

Señala el artículo. 7 literal a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que: "No se admite la acción contencioso administrativa respecto de los siguientes actos: a) los consentidos expresamente, y aquéllos en que *no se haya agotado la vía administrativa*. Se entiende que está agotada la vía administrativa, cuando se haya hecho uso en tiempo y forma de los recursos pertinentes y cuando la ley lo disponga expresamente".

En reiteradas ocasiones la Sala ha resuelto que la impugnación de los actos administrativos mediante recursos regulados en reglamentos sin respaldo en la ley de la materia no es indispensable para habilitar la acción contenciosa ante este Tribunal. Se ha considerado que la regulación de los recursos es materia exclusiva de las leyes, y consiguientemente el ejercicio del derecho que franquean, debe tener fundamento legislativo para ser desarrollado en los reglamentos con carácter vinculante. La Sala estima la necesidad de revisar el argumento que antecede a efecto de confirmar o modificar la solución apuntada, especialmente, al analizar los efectos de una sentencia que ha sido pronunciada por la Sala de lo Constitucional, relacionada con el mismo asunto en materia que concierne a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y al Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial.

En la Sentencia pronunciada por la Sala de lo Constitucional de las nueve horas del quince de marzo de dos mil dos, fueron impugnadas por inconstitucionalidad varias disposiciones del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, entre otras, los artículos 169 y 262, que establecen respectivamente un procedimiento verbal general previo a la sanción por una infracción en presencia del agente de tránsito y el derecho de apelar ante el Director General de Tránsito por la imposición de las multas por infracciones graves o muy graves.

En la prenotada sentencia se afirma en relación al primer artículo: "siendo que el REGETRASEV regula en el art. 169 un procedimiento verbal general, aplicable en forma previa a la imposición de sanciones por infracciones advertidas *in fraganti*, no existe la inconstitucionalidad alegada, *debiendo desestimar la pretensión en este aspecto*" (fragmento considerando VII.2B.b), y en relación al segundo artículo: "finalmente, el art. 262 del REGETRASEV establece el recurso de apelación respecto de las multas impuestas por infracciones advertidas *in fraganti*". Al respecto - dice la sentencia- "es necesario recordar lo sostenido por la sala en sentencia de 28; V-2001, pronunciada en el proceso de Inc. 4-99, que de la existencia del denominado "derecho a la protección jurisdiccional", surge una serie de categorías jurídicas subjetivas integrantes de la esfera jurídica del individuo englobadas bajo la rúbrica "debido proceso" o "proceso constitucionalmente confirmado". Dos de esas categorías son el derecho de audiencia y el acceso a los medios impugnativos legalmente contemplados o derecho a recurrir. Por tanto, el establecimiento de un recurso de apelación en un cuerpo normativo no puede considerarse excluyente del derecho de audiencia, sino que, por el contrario, ambos se complementan como categorías integrantes del debido proceso. De conformidad con lo antes expresado, se advierte que en el art. 262 del REGETRASEV no existe la inconstitucionalidad alegada, *debiendo desestimar la pretensión en este aspecto* ". .

La sentencia antes citada, a partir del texto contenido en el romano I número 4 letra "A", relaciona entre otros el alegato que se estima pertinente a la consideración anterior. En él se planteó que "el reglamento no puede suplir a la ley, cuando hay materias que están reservadas a la misma... ", "como bien lo establece la Constitución en el art. 11 inc. 10. Cn., la garantía de audiencia debe estar regulada conforme a las leyes, y en ningún momento señala que podrá hacerse conforme a los reglamentos". En este punto la expresada Sentencia afirmó: "al interpretar el Art. 11 fuc. 1° debe entenderse que el término "leyes" utilizado por el constituyente significa ley en sentido material; es decir cualquier producto, normativo emanado de todo ente con potestades normativas constitucionalmente conferidas".

En el sentido indicado, las normas consignadas primero en el art. 169, que reglamenta la tramitación de un procedimiento verbal previo a la imposición de sanciones y, segundo en el art. 262 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, que concede el derecho de apelación, les ha sido reconocida su constitucionalidad al margen de la reserva legal y por esto, en el caso de faltar el cumplimiento del procedimiento o en su caso el oportuno ejercicio del derecho de apelar ante el Director General de Tránsito debe interpretarse como aceptación de la actuación administrativa. Por otro lado, el hecho de concurrir esa regulación con el presupuesto procesal del agotamiento de los procedimientos y recursos regulados, no desvirtúa la esencia del derecho de impugnación procesal que habilita el Art., 262 del Reglamento mencionado, además de otras consideraciones consignadas en la

sentencia a que se, hace referencia, por lo que es necesario reconocer a partir de esa resolución, que la circunstancia de hallarse en el Reglamento General de Transito y Seguridad Vial un procedimiento sancionatorio que incluye el derecho de apelar, estas regulaciones no son componentes de reserva legal y su falta de observación no debe ser desestimada como agotamiento de la vía administrativa.

En este sentido, esta Sala modifica el criterio sostenido en vanas resoluciones anteriores.

En el escrito de demanda presentado por el señor Francisco Alexander Martínez Acosta el tres de julio de dos mil uno, bajo el acápite "SOBRE EL NO-AGOTAMIENTO DE SEDE ADMINISTRATIVA", el demandante reitera el primer criterio de este Tribunal respecto al agotamiento de la vía administrativa y agrega: "El Reglamento General de Tránsito posibilita que el infractor interponga un Recurso; siendo esto una materia sometida a Reserva de Ley, por lo que no se puede exigir que se agote un recurso que no es producto de una Ley formal; por lo que si es procedente acudir directamente a la acción contenciosa dentro del termino (sic) que establece el Art. 11 LJCA". Así mismo, en el escrito de alegatos presentado por el demandante en fecha veinticinco de julio de dos mil dos, éste reitera dicha postura: "Los mecanismos procesales de Impugnación (sic) es materia Reservada a la Ley, no se puede argumentar que la demanda incoada es improcedente por no haber hecho uso de los recursos en sede administrativa, ya que los mismos se fundan en el Reglamento (sic) General de Tránsito y Seguridad Vial, en ese entendido, me es válido acudir Directamente (sic) ha (sic) esta Honorable Sala, para que sea ella quien dirima la legalidad o no del acto impugnado".

De lo manifestado por el demandante puede inferirse que éste no hizo uso del recurso de apelación establecido en el Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial por la multa que se relaciona en la demanda.

Por tanto, de conformidad a las razones expuestas y a los artículos 7 y 15 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Sala: RESUELVE Declárese inadmisibile la demanda presentada por el señor Francisco Alexander Martínez Acosta contra el Director General de Tránsito, mediante escrito presentado el día tres de julio del año dos mil uno.

PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.